EXPEDIENTE No: ****
QUEJOSO: Q1
AGRAVIADO: V1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN
28/2014
AUTORIDAD
DESTINATARIA: H. AYUNTAMIENTO DE
CULIACÁN, SINALOA

Culiacán Rosales, Sin., a 13 de agosto de 2014

LIC. SERGIO TORRES FÉLIX,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CULIACÁN, SINALOA.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 2º; 3º; 4º Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1º; 7º, fracción III; 16, fracción IX; 57 y 59 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, así como 1º; 4º; 77; 94; 95 y 96 de su Reglamento Interno, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número ****, relacionados con la queja interpuesta por el señor Q1 por presuntas transgresiones a derechos humanos en perjuicio de su hijo V1, consistentes en los derechos de la niñez, a la seguridad jurídica y al derecho a la legalidad, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

A. Con fecha 20 de septiembre de 2012, el señor Q1 presentó queja ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual hizo consistir en violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de su hijo V1, de ** años de edad, atribuidos a elementos de la policía municipal de Culiacán.

En dicho escrito de queja manifestó que ese día, al llegar a su domicilio particular se enteró a través de su esposa que su hijo fue detenido por elementos de la corporación policiaca referida de manera arbitraria y que al trasladarlo a las instalaciones del Tribunal de Barandilla de Culiacán registraron sus datos personales y le tomaron fotografías.

Asimismo, señaló que de acuerdo con el dicho de su menor hijo, durante su detención le colocaron las esposas en las muñecas, las cuales le dejaron marcas debido a que se las pusieron con mucha presión.

Sobre esto último, el Bando de Policía y Gobierno de Culiacán establece que la colocación de las esposas como parte de las herramientas de trabajo de los elementos policíacos deberán utilizarse de manera excepcional y siempre cuidando la integridad física de los infractores.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1. Escrito de queja presentado por el señor Q1, a través del cual hace valer actos violatorios de derechos humanos cometidos en perjuicio de su menor hijo V1, consistentes en la seguridad personal y jurídica, atribuidos a elementos de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán, Sinaloa, así como de personal del Tribunal de Barandilla del mismo municipio.

En dicho escrito refirió que el día 20 de septiembre de 2012, al llegar a su domicilio se enteró por su esposa que su hijo fue detenido por elementos de la policía municipal de manera arbitraria y que para su traslado a las instalaciones del Tribunal de Barandilla le colocaron las esposas, además de que una vez en dichas instalaciones le tomaron sus datos personales y fotografías, mismos que quedaron archivados.

2. Con esa misma fecha, personal de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio fe de las lesiones que presentaba el menor en las muñecas de ambas manos, consistentes en escoriaciones de color rojizo, marcas que produce la colocación de las esposas, a pesar de que en el informe requerido a la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva se niega que se las hayan puesto para su traslado a las instalaciones del Tribunal de Barandilla.

3. Con oficio número **** de fecha 25 de septiembre de 2012, se solicitó información sobre los hechos al Director de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán.

4. Mediante oficio número **** de fecha 26 de septiembre 2012, se solicitó información sobre los hechos narrados en el escrito de queja al Juez Coordinador del Tribunal de Barandilla de Culiacán.

5. Con oficio número **** de fecha 27 de septiembre de 2012, se recibió la información solicitada al Coordinador del Tribunal de Barandilla, manifestando que efectivamente el menor V1 fue puesto a disposición de ese tribunal.

Agregó además que la detención del menor se debió por infringir el Bando de Policía y Gobierno de Culiacán.

Así también acepta que fueron registrados los datos del menor, ya que a su decir, tanto a personas mayores como a menores infractores tienen que registrarlos a efecto de proceder o no a su calificación, ello de acuerdo con el contenido de los artículos 122, 123, 124 y 125 del Bando de Policía y Gobierno de Culiacán.

Solamente que los numerales que refiere la autoridad aplican a las personas que fueron sancionadas y el caso que nos ocupa, la misma autoridad, por tratarse de un menor de edad, afirma que no es sujeto de sanción, y por lo tanto no se llevó a cabo el procedimiento administrativo correspondiente y como consecuencia tampoco hubo asesoría jurídica para el agraviado, pero sí se le aplicó el contenido de dichos ordenamientos jurídicos.

El Coordinador del Tribunal de Barandilla hizo énfasis que de acuerdo al contenido del artículo 126 del Bando de Policía y Gobierno de Culiacán, los menores no son sujetos a procedimientos administrativos y en consecuencia no hubo asistencia legal.

Sin embargo, de la documentación que agrega al informe se encuentra la autorización de salida del menor, de la que se advierte que el motivo de ésta fue por amonestación.

6. Mediante oficio número **** de fecha 3 de octubre de 2012, suscrito por el Jefe del Departamento Enlace Jurídico de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán, se recibió la información solicitada respecto los hechos motivo de la queja, agregando al mismo el parte informativo homologado, el informe de detención y el certificado médico.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El día 20 de septiembre del año 2012, el menor V1 fue detenido por elementos policíacos de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán, para lo cual le colocaron las esposas causándole escoriaciones en ambas muñecas.

Asimismo, tanto el Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán y el Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla manifestaron que a toda persona que ingresa a dichas instalaciones se le registran sus datos personales y se le toman fotografías de acuerdo a lo que dispone el artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Finalmente, el Coordinador de Jueces hizo énfasis en que a los menores de edad no se les instaura procedimiento alguno por no ser sujetos de éste, sin embargo en la hoja de salida del menor se dejó asentado que recuperó su libertad por amonestación.

Lo afirmado por dicho servidor público resulta contradictorio, ya que si los menores de edad no son sujetos al procedimiento administrativo ¿cómo se llegó a determinar la sanción impuesta para recuperar su libertad?

IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico llevado a cabo sobre las constancias que integran el expediente que ahora se resuelve, este organismo de derechos humanos pudo acreditar violaciones al derecho a la libertad personal y a los derechos de los niños, derivado de la prestación indebida del servicio público con motivo de la detención arbitraria y el registro de sus datos personales del menor V1, atribuibles a elementos de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán y personal del Tribunal de Barandilla del mismo municipio, ya que de los informes rendidos por las autoridades señaladas como responsables de los hechos resultaron contradictorios al manifestar, por un lado, que los menores de edad no son sujetos a procedimiento administrativo y por otro, informan que el menor recuperó su libertad una vez que cumplió con la falta atribuida, la cual consistió en una amonestación, en atención a las siguientes consideraciones:

DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: Derechos de la niñez y seguridad jurídica

HECHOS VIOLATORIOS ACREDITADOS: Violación a los derechos de la niñez y violación al debido proceso

La violación a los derechos de la infancia denota toda acción u omisión indebida, por la que se vulnere cualquiera de los derechos humanos específicamente definidos y protegidos por los ordenamientos jurídicos locales, nacionales o internacionales en atención a su situación de seres en desarrollo, esta conducta ha de ser realizada de manera directa por la autoridad o servidor

público o de manera indirecta por un tercero mediante su anuencia o autorización.

Una de las modalidades de violación a los derechos humanos, específicamente definidos y protegidos en atención a la situación de ser infantes, se encuentra, entre otras, actos u omisiones por las que el infante ha sido privado ilegal o arbitrariamente de su libertad, como son: encarcelarlo, recluirlo, asegurarlo o confinarlo en lugares no adecuados en atención a su minoría de edad y privarlos de su libertad en el mismo lugar reservado para los adultos.

Para comprender los alcances de lo anterior, es necesario recordar que en la legislación nacional e internacional se ha reconocido a través de diversos ordenamientos jurídicos la necesidad de una protección especial en materia de menores, más aún de aquellos que cometen infracciones o faltas administrativas, reconociéndoles la titularidad de derechos, entre otros, la presunción de inocencia, que se le informe por sí o por medio de sus padres de las cargas que pesan contra él, que disponga de asistencia jurídica apropiada, que la causa sea dirimida en breve término y por la autoridad u órgano correspondiente y evitar la prisión preventiva adoptando medios sustitutorios.

Respecto la recepción de los datos personales del menor así como las fotografías no resultan aplicables, ya que las mismas autoridades señaladas como responsables de los hechos, si bien es cierto afirman que fue detenido por infringir el Bando de Policía y Gobierno y además argumentan que no fue sujeto de procedimiento administrativo alguno, le imponen como castigo la amonestación a efecto de dejarlo en libertad, entregándolo a sus familiares.

Sin embargo, a cualquier persona que se le realice el procedimiento administrativo correspondiente por haber cometido una falta administrativa, la ley es clara y establece cuáles son los datos que se deben recabar y el manejo que se le dará a los mismos.

El personal del Tribunal de Barandilla de Culiacán violentó los derechos del menor V1, ya que al no ser sujeto a procedimiento administrativo, como se afirma en la documentación agregada al expediente de mérito, se violentaron sus derechos al debido proceso.

Es de advertirse que el Bando de Policía y Gobierno del municipio de Culiacán sólo excluye de sujeción al procedimiento administrativo a menores de 12 años de edad y a incapaces, esto es, los considera inimputables, pero no excluye a mayores de dicha edad, como es el caso del menor V1, que al momento de ocurrir los presentes hechos contaba con ** años de edad.

Por tanto, la determinación de no sujetar a procedimiento administrativo al menor, a través del cual tuviera la oportunidad de defenderse, de ser oído y aportar las probanzas para acreditar su dicho, es violatorio de sus derechos, aún más si consideramos que se contravino un principio esencial de justicia como el de ser oído y vencido en juicio a efecto de recibir una sanción, y más aún, si consideramos que sin haber tenido oportunidad de defensa, quedó registrado en una base de datos que alberga su fotografía y huellas dactilares.

Es de subrayarse que el Bando de Policía y Gobierno del municipio de Culiacán, efectivamente determina la existencia de un registro, pero lo supedita a las personas que hubiesen sido sancionadas por la comisión de infracciones a que se refiere dicho Bando (artículo 123).

El menor del presente asunto no fue sujeto a un procedimiento administrativo para determinar su responsabilidad por la comisión de una falta administrativa, por tanto, no es posible jurídicamente hablando la imposición de una sanción y menos aún sustentar un registro en tales circunstancias.

No siendo suficiente lo anterior, se agrega en el informe rendido por el Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla de Culiacán, que toda persona infractora, sea mayor o menor de edad, sus datos son registrados al momento de su ingreso.

El Coordinador del Tribunal de Barandilla de Culiacán en su informe rendido ante esta CEDH fundamenta la existencia de un registro de ingreso al tribunal de conformidad con los numerales 122, 123, 124 y 125 del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Culiacán, numerales éstos que en efecto precisan entre otros, la existencia de un registro de infractores, pero como ya se advirtió por esta CEDH, dicho registro lo circunscribe a aquellas personas que les resultase una sanción.

Esto es, que el registro no puede en este caso ser de ingreso, sino que debe generarse una vez acreditada la responsabilidad por infracciones al Bando de Policía y Gobierno del municipio de Culiacán.

Del artículo 113 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se desprende la necesidad de contar con un registro administrativo de detenciones, mismo que exige contener los datos siguientes:

- I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
- II. Descripción física del detenido;
- III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;

- IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción, y
- V. Lugar a donde será trasladado el detenido.

Como puede advertirse, este registro inicial no exige ni fotografías ni huellas dactilares del detenido, por lo que en el caso que nos ocupa, se advierten serias contradicciones a lo dispuesto por la norma por parte del personal del Tribunal de Barandilla en perjuicio del menor que nos ocupa en la presente resolución.

La Convención sobre los Derechos del Niño protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación o la adhesión), los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad internacional. Los Estados parte de la Convención están obligados a estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño.

Este documento establece estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos. Define los derechos humanos básicos que disfrutaban los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.

Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas.

Con tales actos, los servidores públicos violentaron la legislación local, nacional e internacional, misma que será analizada en lo sucesivo.

Del análisis realizado a la información proporcionada por la autoridad señalada como responsable de los hechos, menciona que la detención del menor se llevó a cabo con fundamento en el artículo 64, fracción III del Bando de Policía y Gobierno de Culiacán, el cual a la letra dice:

“Artículo 64. Son faltas contra la integridad física, las cuales podrán ser sancionadas con arresto de 12 hasta 30 horas, las siguientes:

.....

III. Participar en grupos de dos o más personas en riñas.”

Con dicho fundamento que aduce la autoridad señalada como responsable, al menor agraviado se le detuvo por infringir dicho numeral, el cual además claramente establece la sanción acreedora, siendo trasladado al Tribunal de Barandilla de Culiacán donde sin ser sujeto a procedimiento, registraron sus datos personales, le fueron tomadas fotografías y sus huellas dactilares, aplicándole además, la amonestación como sanción para que fuera entregado a sus familiares sin el previo procedimiento administrativo, bajo el argumento de que por ser menor de edad no es sujeto al mismo.

El argumento de la autoridad en torno al caso del menor que nos ocupa, de parte del Jefe del Departamento Jurídico fue que se realizó con base en el contenido de los artículos 43, 109, 110, 112 y 113 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una vez analizados dichos numerales, se advierte que los mismos hacen señalamiento, entre otras cosas, al registro administrativo de detenidos, pero en ninguno se establece que dentro de tales datos deberán contemplarse las fotografías y huellas dactilares, mucho menos de los menores infractores.

Así también, tales hechos los relaciona con el contenido de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en los artículos 88, 89 y 90 fracciones I, II y IV, los cuales establecen, entre otras cosas, el manejo de datos personales, las claves que se asignarán a los encargados de su manejo con el propósito de que quede constancia de cada vez que éstos se consultan, pero tampoco en ningún momento establece que dentro de dicho registro deberán estar las fotografías y huellas dactilares.

Al respecto, la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa señala:

“Artículo 8. Corresponde a las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera sin perjuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad sinaloense, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.”

Asimismo, en el artículo séptimo transitorio, inciso d) menciona:

.....
“d) Si existieran adolescentes menores de catorce años privados de su libertad, se ordenará su inmediata libertad, sin perjuicio de que, en el caso de los mayores de doce años, el Juez Especializado pueda sustituirla por una de las medidas de orientación y protección previstas en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa, escuchando al adolescente, sus padres, tutores o representantes legales y el Ministerio Público.
.....”

La Convención sobre los Derechos del Niño establece lo siguiente:

“Artículo 16

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.”

La Constitución Política del Estado de Sinaloa señala:

“Artículo 1o. El Estado de Sinaloa, como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye en un Estado democrático de derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes.

“Artículo 4o. Bis A.
.....

XIII. Los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección. En los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelven derechos de los niños se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal, atendiendo a las particularidades que se derivan de la situación específica en que se encuentran los niños y que se proyectan razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención personal de dichos procedimientos y las medidas de protección que sea indispensable adoptar en el desarrollo de éstos.

Artículo 4o. Bis C.
.....

VI. El interés superior del niño deberá tener consideración primordial por parte de los tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, así como en todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social. Dicho deber implica que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

Artículo 13. El varón y la mujer son iguales ante la ley. La familia constituye la base fundamental de la sociedad. Los niños y las niñas deberán ser objeto de especial protección. Las personas de la tercera edad y los discapacitados deben recibir apoyo permanente. Toda medida o disposición en favor de la familia y de la niñez, se considerará de orden público.”

En este orden de ideas es de mencionar que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que dicha Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión y los Tratados Internacionales celebrados y que se celebren con aprobación del Senado de la República, serán la ley suprema de toda la Unión.

Por ello, es importante mencionar que los hechos descritos en esta Recomendación transgredieron diversos instrumentos internacionales ratificados por México, particularmente los que a continuación se transcriben:

Declaración de los Derechos del Niño:

“Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.”

Convención sobre los Derechos del Niño:

“Artículo 1. Para los efectos de ésta Convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad.

.....

Artículo 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 37.

.....

b) Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad.

.....

Convención Americana sobre Derechos Humanos:

“Artículo 19. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”

Ante tales hechos queda acreditado que al realizar dichas conductas tanto los agentes municipales como la Jueza Calificadora del Tribunal de Barandilla contravinieron principios y valores de la convivencia humana. Principios que se tomaron como bases del Bando de Policía y Gobierno de Culiacán, el cual señala en su artículo 15, entre otras cosas, lo siguiente:

“Artículo 15. Esta normatividad comprende las reglas mínimas que deben respetar y cumplir todas las personas del municipio, para la sana

convivencia ciudadana. Está fundamentado en los siguientes principios y valores:

.....

- II. El respeto a los derechos humanos;
- III. La protección de la vida digna de la persona humana;
- IV. El respeto a la legalidad;"

Igualmente, en lo que respecta a la omisión del procedimiento administrativo correspondiente, ya que la autoridad argumenta que por tratarse de un menor de edad éste no es sujeto del mismo, sin embargo se le sancionó con una amonestación para estar en posibilidades de entregarlo a sus progenitores.

Con tal acto violentaron el derecho que toda persona tiene a que previo a la sanción, en cualquier materia del derecho, a efecto de imponer una sanción por mínima que ésta sea, deberá llevarse a cabo el procedimiento correspondiente, el cual deberá reunir los requisitos mínimos formales para determinar dicha sanción.

El debido proceso implica la compatibilidad de los pronunciamientos jurisprudenciales con los estándares de justicia o razonabilidad, se trata de un juicio o valoración aplicado directamente sobre la misma decisión o pronunciamiento con el que se pone término a un proceso incidiendo en el fondo de las cosas.

Nuestra legislación local, primordialmente el Bando de Policía y Gobierno de Culiacán, es claro al establecer dicho procedimiento en su artículo 13, que a la letra dice:

“Artículo 13. Ninguna persona será culpable de las faltas administrativas que se le imputen, en tanto no se resuelva lo contrario mediante resolución que recaiga en un procedimiento seguido en forma de juicio ante los tribunales administrativos municipales, en el cual se reúnan todas las formalidades esenciales del mismo.”

En observancia a este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8 consagra los lineamientos generales del debido proceso legal donde se aplique certeramente los derechos tanto sustantivos como adjetivos.

La Corte Interamericana en dicho artículo desarrolla cuáles son las garantías que se han de respetar en la praxis jurisdiccional.

Artículo 8°. Garantías Judiciales

“1. Toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas.

- a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal.
- b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.
- c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa
- d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor
- e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, renunciando o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por ley.
- f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y obtener la comparecencia con testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos
- g) Derecho de no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y
- h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.”

Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que una resolución justa y acorde con el debido procedimiento no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente del derecho reconocido.

Así, el Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona.

No debemos olvidar que el debido proceso es el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados.

Al respecto, el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que todo acto privativo sea dictado por tribunales previamente establecidos, en un juicio en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento.

A la letra, dicho numeral establece lo siguiente:

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el debido proceso legal se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

Esto es, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional debe respetar el debido proceso legal.¹

Igualmente, sobre el tema la jurisprudencia mexicana ha sostenido la siguiente tesis, que es importante en la medida en que descompone los elementos que integran el concepto de “formalidades esenciales del procedimiento”:

¹ Criterio contenido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Ivcher Bronstein”, sentencia de 6 de febrero de 2011, párrafo 102 y Opinión consultiva 18/03, párrafo 123.

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Diciembre de 1995, Tesis: P./J. 47/95, página 133.”

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la legalidad

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Indebida prestación del servicio público

Agregado a lo anterior, el menor V1 durante su traslado a las instalaciones del Tribunal de Barandilla de Culiacán le fueron colocadas las esposas en las muñecas dejando una lesión en ambas manos y al realizarle el dictamen médico correspondiente se dejó asentado que no presentaba lesiones físicas recientes en su superficie corporal, cuando personal de este Organismo Estatal dio fe de dichas lesiones, mismas que a simple vista se observan.

Sobre esto último, el artículo 46 fracción XVII del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Culiacán, hace referencia cuándo y cómo deben ser utilizadas las herramientas de trabajo, entre ellas se encuentran las esposas, mismo que a la letra dice:

“Artículo 46. Corresponde a los agentes de la Dirección de Seguridad Pública el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
.....
XVII. Utilizar los instrumentos de trabajo tales como tolete, esposas y armas de fuego, sólo en los casos en que sea estrictamente necesario para evitar se lesione o se atente contra la integridad física de tercero o la propia;”
.....

Sobre tal circunstancia, en el parte informativo no se hace referencia a ello, ya que se niega el habérselas colocado no obstante que las marcas de las mismas se visualizan alrededor de las muñecas de ambas manos del menor agraviado, quedando con ello desvirtuada la negativa de tal hecho por parte de la autoridad señalada como responsable de los hechos y confirmado lo que el menor refiere en su escrito de queja.

Así entonces con las pruebas con que cuenta esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quedó debidamente acreditado que los elementos de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán, AR1 y AR2, así como el personal del Tribunal de Barandilla actuaron de manera deficiente en perjuicio del menor agraviado.

No debe pasarse por alto que los actos de la administración pública se deben realizar con apego a lo establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de sus titulares.

El principio de legalidad significa que los actos y comportamientos de la administración deben estar justificados en una ley previa, que preferible pero no necesariamente ha de ser de carácter general. Se trata, desde luego, del sometimiento en primer lugar a la Constitución Federal, pero también al resto del ordenamiento jurídico, por ejemplo a las normas reglamentarias emanadas de la propia administración, lo que ha sido dado en llamar el bloque de la legalidad o principio de juricidad de la administración.

Como puede advertirse entonces, el principio de legalidad enmarca y limita otros conceptos jurídicos, tales como el de discrecionalidad, que cabe ser entendida no como actividad libre de la ley, sino como actividad que la propia ley confiere y por tanto guía y limita, sometiendo además al necesario control judicial amplio, determina también el alcance y aplicación de los denominados conceptos jurídicos indeterminados.

Con lo anterior sólo se pretende dejar claro que las autoridades actúen al margen de la ley, en el pleno y debido cumplimiento de sus funciones; que las autoridades siempre funden y motiven su proceder.

A ese respecto, la garantía de fundamentación consiste en que los actos que originan la molestia que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben basarse en una disposición normativa general; es decir, que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice.

La garantía de motivación de la causa legal del procedimiento implica que existiendo una norma jurídica, el caso o situación concretos al respecto de los que se pretende cometer el acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal. En sí la motivación representa el señalar las condiciones de hecho o de derecho por las que se emitió el acto a las cuales les es aplicable un precepto legal, implica el precisar razones congruentes del porqué de su actuación.

La exigencia de fundar legalmente todo acto llevado a cabo por las autoridades llevan a diversas obligaciones, que se traducen en condiciones tales como que el órgano del que tal acto provenga esté investido con facultades expresamente consignadas en la norma jurídica; en que el propio acto se prevea en dicha norma; en que su contenido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan y que dicho acto se contenga o derive de un mandamiento escrito.

Es necesario dejar claro que el informe rendido por el Departamento Jurídico de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán fundamenta que la recopilación de los datos personales del menor V1 se basó, entre otros, en los siguientes artículos 43, 109, 110, 112 y 113 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en concordancia con los artículos 88, 89, 90, fracciones I, II y IV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Tales ordenamientos, como ya se dejó anotado, se refieren a la homologación de los partes informativos, de las reglas para mejorar el acceso a la base de datos, de quién deberá manejarlos a efecto de que quede constancia cada vez que el sistema sea analizado, pero ninguno refiere que a tales datos deberán agregarse fotografías y huellas dactilares de los menores infractores.

Asimismo, el Coordinador del Tribunal de Barandilla de Culiacán informó que de acuerdo al contenido del artículo 126 del Bando de Policía y Gobierno, los menores de edad no son sujetos de procedimiento administrativo; sin embargo, en la hoja de salida expedida a nombre del agraviado se advierte que éste recuperó su libertad previo a la amonestación aplicada como sanción.

Cabe señalar que tampoco se tomó en cuenta por parte de los elementos municipales ni del personal del Tribunal de Barandilla de Culiacán la adición al artículo 4º Bis, apartado A, inciso XIII) de nuestra Constitución local en fecha 26 de marzo de 2008, que señala que los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección.

De tal manera que la conducta de los elementos de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán que llevaron a cabo la detención del menor V1, como el personal del Tribunal de Barandilla, resultó contrario al

derecho a la seguridad jurídica y a la libertad personal como a los derechos de los niños, previsto en los artículos 1º, 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a continuación se transcriben:

“Artículo 1o.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la preferencia sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 14, párrafo segundo

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16, párrafo primero

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión:

“Principio 1. Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

.....

Principio 3. No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado.

.....”

En este sentido también se trastocó por parte de los elementos de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán y personal del Tribunal de Barandilla de este municipio, las disposiciones contenidas en los artículos 3o., 7o. y 9o. de

la Declaración Universal de Derechos Humanos, que de manera textual establece lo siguiente:

“Artículo 3°.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 7°.

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 9°.

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.”

Convención Americana sobre Derechos Humanos:

“Artículo 11.

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

.....

Artículo 24.

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”

Los artículos 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales señalan lo siguiente:

“Artículo 9. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

Artículo 10.- Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

Así pues, la actuación de los servidores públicos que se involucren con menores de edad, deben ineludiblemente apegar su conducta a las disposiciones

estipuladas en los ordenamientos antes señalados para efecto de cumplir en este sentido con el deber de la legalidad.

Nos es necesario afirmar que todo lo aquí expuesto no tiene por finalidad que esta Comisión se oponga a las detenciones de cualquier persona que infringe la legislación penal o las reglas administrativas, sino que se busca que los servidores públicos encargados de procurar el orden y la seguridad ajusten su conducta a las normas jurídicas aplicables.

Al no respetarle el ejercicio pleno de los derechos de los menores, se transgrede el interés superior del niño, el cual es uno de los principios que es tomado como base de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera que las conductas desplegadas por los elementos de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán y personal del Tribunal de Barandilla de este municipio, transgredieron tanto la legislación local como diversos instrumentos de carácter internacional con lo cual le violentaron los derechos humanos al menor V1.

Por otra parte, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones en que incurren en el desempeño de sus atribuciones que contempla la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, pues el consentir tales omisiones es como dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez e imparcialidad que garantizan el éxito del buen servicio público.

En ese mismo sentido, los artículos 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, señalan:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta

Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.”

Constitución Política del Estado de Sinaloa:

“Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este Título, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los Ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

Todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de la jerarquía, denominación y origen del cargo. Se concede acción popular para denunciar los delitos y faltas a que se refiere este Título, bajo la más estricta responsabilidad del denunciante y mediante la presentación de elementos de prueba.”

Numerales de los que claramente se desprende que servidor público es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los Ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

En similares términos se pronuncia la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en sus artículos 2º; 3º; 14 y 15, que establecen:

“Artículo 2. Es sujeto de esta Ley, toda persona física que desempeñe o haya desempeñado un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o paraestatal, municipal o paramunicipal, así como en las sociedades y asociaciones similares a estas, en Organismos que la Constitución Política del Estado de Sinaloa y Leyes otorguen autonomía y, en los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, con independencia de la jerarquía, denominación y origen del empleo, cargo o comisión, así como del acto jurídico que les dio origen.

Artículo 3. Los servidores públicos en ejercicio de su función serán sujetos de responsabilidad administrativa cuando incumplan con sus deberes o incurran en las conductas prohibidas señaladas en esta Ley, así como en aquéllas que deriven de otras leyes y reglamentos.

Artículo 14. Es responsabilidad de los sujetos de esta ley, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en la misma, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones.

Artículo 15. Todo servidor público, tendrá los siguientes deberes:

- I. Cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público;
-

XXVII. Proporcionar en forma oportuna la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les compete la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;"

Ordenamientos que de manera expresa señalan quién tiene la calidad de servidor público y que lo es cualquier persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los tres poderes de Gobierno del Estado incluyendo los que prestan su servicio en la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva y del Tribunal de Barandilla, ambos de esta ciudad de Culiacán.

De ahí que con tal carácter está obligado a observar en el desempeño de sus funciones los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como de cumplir con eficiencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de todo acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del empleo, cargo o comisión encomendado.

Asimismo se desprende la obligación de todo servidor público de nuestro Estado en proporcionar de forma oportuna la información y datos solicitados por esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos como institución a la que legalmente le compete vigilar y defender los derechos humanos de la persona en territorio sinaloense.

Con base en lo expuesto anteriormente, y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4º Bis, segundo párrafo, que afirma que los Derechos Humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular a usted, señor Presidente Municipal de Culiacán, como autoridad superior jerárquica, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya a la Unidad de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que al considerar los actos motivo de la queja así como los razonamientos

expuestos por esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tramite el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente en contra de los elementos de la Dirección de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán, AR1 y AR2, que llevaron a cabo la detención del menor V1, así como de personal del Tribunal de Barandilla de esta ciudad quienes conocieron del caso, a fin de que se investigue la conducta analizada en la presente resolución y de encontrarse que incurrieron en alguna responsabilidad administrativa se les sancione conforme a la ley de responsabilidad administrativa que le resulte aplicable.

Una vez iniciado tal procedimiento, se envíe a esta CEDH constancia de tal acto, y en su momento, de la resolución correspondiente.

SEGUNDA. Instruya al personal del Tribunal de Barandilla de Culiacán, Sinaloa, para que al tomar en consideración los actos motivo de la queja, así como los razonamientos expuestos por esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en lo sucesivo al momento de que le sea puesto a disposición algún menor se apeguen a las normas locales, nacionales e internacionales citadas en el cuerpo de la presente resolución, a fin de atender a la protección integral y el interés superior del niño.

TERCERA. Gire las instrucciones necesarias a fin de que de inmediato sean borrados los datos personales del menor agraviado, incluyendo lo que respecta a las fotografías y huellas dactilares.

CUARTA. Se capacite al personal del Tribunal de Barandilla y a los agentes aprehensores respecto del actuar esperado ante el caso de menores de edad sujetos a responsabilidad por presuntas infracciones al Bando de Policía y Gobierno del municipio de Culiacán, Sinaloa.

VI. NOTIFICACIÓN Y APERCIBIMIENTO

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese al licenciado Sergio Torres Félix, Presidente Municipal de Culiacán, de la presente Recomendación, misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número 28/2014, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

También se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el pasado 10 de junio de 2011.

El segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la misma, expresamente señala hoy día:

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Asimismo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma de fecha 10 de junio de 2011, que menciona en su artículo 1° que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente.

En ese sentido, tanto la no aceptación, se considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado.

Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el desprecio a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional.

En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos defensores de los derechos humanos del país, requieren, además de la buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en el párrafo tercero, del multicitado artículo 1° constitucional.

Es importante mencionar que de una interpretación armónica al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 100, párrafo tercero del Reglamento Interno de la misma, cuando una autoridad o servidor público acepta una recomendación, asume el compromiso de dar a ella su total cumplimiento.

Ahora bien y en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese al señor Q1, en su calidad de quejoso, de la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO